

República de Colombia
Rama Judicial



Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Santiago de Cali, Catorce (14) de julio de dos mil veinte (2020).

Auto Interlocutorio No. 216

MEDIO DE CONTROL: EJECUTIVO
EJECUTANTE: MARCO YAMID MORALES MARULANDA
EJECUTADA: NACION-MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL
RADICACION: 76001-33-33-016-2018-00158-01
PROVIDENCIA
TEMA:

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala el recurso de apelación¹ interpuesto por la parte ejecutante contra el auto interlocutorio No. 448 del 24 de julio de 2018² proferido por el Juzgado Dieciséis Administrativo Oral del Circuito de Cali, mediante el se resolvió no librar mandamiento ejecutivo en contra de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL.

II. DEMANDA

En ejercicio del medio de control ejecutivo, y actuando a través de apoderado judicial, el señor MARCO YAMID MORALES MARULANDA presentó demanda contra la NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL, para que se librara mandamiento ejecutivo de pago, formulando las pretensiones³ y exigiendo el pago de las sumas que se enlistan en la demanda.

Mediante auto interlocutorio No. 448 del 24 de julio de 2018, el Juzgado Dieciséis Administrativo Oral del Circuito de Cali, negó librar mandamiento de pago en contra del ejecutado, determinando que en el presente asunto se dio cumplimiento a la sentencia que se pretende ejecutar, por tanto no existía obligación pendiente por satisfacer a favor del ejecutante.

Inconforme con la decisión anterior, dentro del término la parte ejecutante presentó recurso de apelación, y es por ello que ahora el Tribunal tiene a su cargo el conocimiento del mismo.

II. LA PROVIDENCIA RECURRIDA

A través de auto interlocutorio No. 448 del 24 de julio de 2018 proferido

¹ Fl. 75, del cpal.

² Fls. 95-98, ídem.

³ Fl. 3, ídem.

por el Juzgado Dieciséis Administrativo Oral del Circuito de Cali, la Juez no libró madamamiento de pago, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

“Para el Juzgado, la Policia Nacional dio cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo Sala de Descongestión el 22 de de enero de 2014 por las siguientes razones:

En el proceso ordinario de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, radicado 76-001-23-31-000-2005-03600-01, que terminó sentencia de segunda instancia No. 001 del 22 de enero de 2014, el acto administrativo contentivo de la sanción disciplinaria, impuesta al señor Marco Yamid Morales Marulanda por parte de la Oficina de control Interno del Departamento de Policía Valle, no fue objeto de debate ni decisión por parte el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle.

El proceso disciplinario y el proceso ordinario judicial de nulidad y restablecimiento del derecho son procesos diferentes, autónomos e independientes, en el que no existe identidad de objeto, causa, ni persiguen una misma finalidad.

Mientras en el proceso disciplinario se sanciona las actuaciones de los funcionarios que conlleven el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos y funciones y la incursión en prohibiciones con el fin de proteger la función Pública en el proceso ordinario judicial de nulidad y restablecimiento del derecho se hace control de legalidad de las actuaciones de la administracion con el fin de restaurar y mantener el ordenamiento jurídico así como restablecer el derecho subjetivo que resultado afectado por los actos de la administración.

Así entonces, la obligación de reintegro del ejecutante a un cargo igual o superior al que desempeñaba al momento del retiro, impuesta en la sentencia No. 001 del 22 de enero de 2014 se pudo cumplir por el término en que la sanción disciplinaria, dictada dentro de la investigación disciplinaria No. DEVAL -2005-41, no había surtido efectos, esto es entre el 11 de mayo de 2005 al 19 de mayo de 2008, pues, a partor de la última fecha el Ejecutante fue retirado por una causa diferente a la que se debatió en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa”.

Por lo anterior, concluyó:

“En suma, atendiendo que el señor Morales Marulanda sólo pudo estar en el servicio activo entre el 11 de mayo de 2005 al 19 de mayo de 2008, la obligación de reintegro se sujetó a dicho período, la cual se efectuó formalmente solo para efecto de reconocimiento y pago de salarios y prestaciones sociales causadas por dicho tiempo, en tanto, a la fecha de la sentencia existía un acto en firme que lo sancionaba con destitución haciendo imposible reintegrarlo realmente al servicio una vez quedó ejecutoriada la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca Sala de Descongestión.

Por lo discutido en precedencia el Despacho concluye que la Policía Nacional dio cumplimiento a la sentencia No. 001 del 22 de enero de 2014 impartida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle Sala

de descongestión, sin que exista obligación pendiente por satisfacer a favor del Ejecutante. En tal virtud, negará la orden de mandamiento ejecutivo solicitada".

III. EL RECURSO DE APELACIÓN

La parte ejecutante interpuso recurso de apelación contra el auto interlocutorio No. 448 del 24 de julio de 2018, solicitando que se revoque el auto impugnado y en su lugar se libre mandamiento de pago.

En primer lugar, señala que la sentencia judicial presentada como título ejecutivo contiene una obligación clara, expresa y exigible. Seguidamente afirma que se cumplen los requisitos de forma y de fondo contenidos en el artículo 422 del CGP para librar mandamiento de pago.

Argumenta que la entidad ejecutada desconoce la obligación contenida en la sentencia No. 001 del 22 de enero de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle Sala de Descongestión, excusándose en situaciones posteriores que no tienen ningún tipo de relación con la decisión judicial, razón por la cual considera que se dio cumplimiento parcial a la decisión judicial referida.

Por otro lado manifiesta que si bien a actor se le impuso una sanción disciplinaria- *destitución e inhabilidad por 5 años*- a través de la Resolución No. 01897 del 7 de mayo de 2008, la misma no puede tenerse en cuenta por la Policía Nacional al momento de dar cumplimiento a la sentencia judicial proferida por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en virtud a que en el momento de su notificación- 19 de mayo de 2008- el demandante ya había sido retirado del cargo -11 de mayo del 2005-, sumado al hecho que dicha sanción no fue un asunto que la entidad hubiese planteado en el proceso judicial de reintegro, por tanto afirma que la sanción disciplinaria no puede ejecutarse al momento de cumplir con la orden judicial contenida en la sentencia que sirve de título en el presente caso.

Seguidamente afirma que la sanción impuesta en el proceso disciplinario tampoco hubiera podido hacerse efectiva, teniendo en cuenta que al momento de quedar ejecutoriada la sentencia que ordena el reintegro y pago de emolumentos laborales -7 de febrero 2014- habían transcurrido 5 años y conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1015 del 2006 y 32 del Código Disciplinario Único (Ley 734 del 2002) *"la sanción disciplinaria prescribe a los 5 años o mientras permanece vigente el acto administrativo que la impuso produciendo efectos, esto es, mientras obligue a la administración y al sancionado a ejecutar o a cumplir, según el caso, la destitución o la inhabilidad, y que las mismas se extinguen como consecuencia de diversos fenómenos jurídicos, como su cumplimiento o ejecución, pero también por la prescripción de la sanción"*⁴.

⁴ Fl. 105, del expediente.

Finalmente manifiesta, que el *a quo* debió librar mandamiento de pago, teniendo en cuenta que en el presente asunto se cumplen los presupuestos de forma y de fondo para ello, resalta que el tema de la sanción disciplinaria impuesta es un asunto que debe analizarse después de librar mandamiento de pago- contestación de la demanda- oportunidad en la que el ejecutado podrá excepcionar y en ese orden considera que la “sanción” no puede ser objeto de análisis al momento de analizar si es procedente librar mandamiento de pago.

IV. CONSIDERACIONES

4.1. Planteamiento del problema por resolver.

Debe la Sala advertir que la decisión del juez de instancia de no librar mandamiento de pago obedece a que el ejecutado dio cumplimiento a la sentencia No. 001 del 22 de enero de 2014 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, razón por la cual a su criterio no existe obligación pendiente por cumplir a favor del ejecutante.

Por su parte, el recurrente considera que no le asiste razón al *a quo* y que en el presente asunto la Policía Nacional dio cumplimiento parcial a la sentencia mencionada. Hace énfasis en que la entidad desconoce la obligación contenida en la sentencia en tanto se dio cumplimiento a la misma teniendo en cuenta la sanción disciplinaria impuesta y en ese sentido no se reconocieron los emolumentos salariales con fundamento en las ordenes contenidas en la providencia del 22 de enero de 2014.

Con esa precisión, corresponde a la Sala determinar si en el presente caso le asiste razón al *a quo* para no librar mandamiento de pago por considerar que la Policía Nacional dio cumplimiento a la sentencia No. 001 del 22 de enero de 2014, y en razón a ello no existe obligación pendiente por cumplir a favor del ejecutante.

O si por el contrario en el presente asunto se dio cumplimiento parcial a la sentencia mencionada, en tanto no se ordenó el reintegro y pago de sueldos y prestaciones dejadas de percibir desde la fecha siguiente al día del retiro, hasta que se hiciera efectivo el reintegro.

Previo a desatar el problema planteado, la Sala se pronunciará sobre la procedibilidad del recurso, del concepto de título ejecutivo y descenderá al caso concreto.

4.1.1 Procedibilidad del recurso de apelación y su trámite

Debe primero la Sala advertir que el C.P.A.C.A., no dispone de un procedimiento especial para efectos del trámite del proceso ejecutivo;

por ello, en virtud del artículo 308 ídem⁵, para los aspectos no regulados, debe acudir al Código de Procedimiento Civil; es decir, las disposiciones del Código General del Proceso.

En tal orden se tiene que de conformidad con lo previsto en el artículo 438 del C.G.P., los recursos procedentes contra el mandamiento de pago, son los siguientes:

“ARTÍCULO 438. RECURSOS CONTRA EL MANDAMIENTO EJECUTIVO. *El mandamiento ejecutivo no es apelable; el auto que lo niegue total o parcialmente y el que por vía de reposición lo revoque, lo será en el suspensivo. Los recursos de reposición contra el mandamiento ejecutivo se tramitarán y resolverán conjuntamente cuando haya sido notificado a todos los ejecutados” (Negrillas de la Sala).*

Así las cosas, en el presente asunto estamos frente a la apelación del auto que negó librar mandamiento de pago, el cual, a la luz de la norma citada sería susceptible de alzada, razón por la que se procede a decidir la apelación.

En relación con el trámite recurso de apelación contra autos, el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, prevé:

- “1. El que rechace la demanda.
2. El que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese mismo trámite.
3. El que ponga fin al proceso.
4. El que apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales, recurso que solo podrá ser interpuesto por el Ministerio Público.
5. El que resuelva la liquidación de la condena o de los perjuicios.
6. El que decreta las nulidades procesales.
7. El que niega la intervención de terceros.
8. El que prescinda de la audiencia de pruebas.
9. El que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente (...).”

Como quiera que el artículo transcrito no enlista el auto mediante el cual se niega librar el mandamiento de pago, conforme con lo establecido en el artículo 306 del C.P.A.C.A. es necesario remitirse al Código General del Proceso, normativa que en su artículo 321 señala:

“Son apelables las sentencias de primera instancia, salvo las que se dicten en equidad. También son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia:

1. (...)

⁵ **ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA.** El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.

4. El que niegue total o parcialmente el mandamiento de pago y el que rechace de plano las excepciones de mérito en el proceso ejecutivo.

(...)

A su turno, el artículo 244 de la Ley 1437 del C.P.A.C.A., señala:

“La interposición y decisión del recurso de apelación contra autos se sujetará a las siguientes reglas:

1. (...)

*2. **Si el auto se notifica por estado, el recurso deberá interponerse y sustentarse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes ante el juez que lo profirió.** De la sustentación se dará traslado por Secretaría a los demás sujetos procesales por igual término, sin necesidad de auto que así lo ordene. Si ambas partes apelaron los términos serán comunes. El juez concederá el recurso en caso de que sea procedente y haya sido sustentado.*

*3. **Una vez concedido el recurso, se remitirá el expediente al superior para que lo decida de plano.***

*4. **Contra el auto que decide la apelación no procede ningún recurso”.** (Negrilla fuera de texto).*

De la norma transcrita se concluye que si el auto se profiere por escrito, como sucedió en este caso y, además, se notifica por estado, el recurso de apelación se deberá interponer y sustentar por escrito dentro de los tres (3) días siguientes ante la autoridad judicial que lo dictó y una vez concedido el recurso de apelación contra alguna de las decisiones previstas en el artículo 243 del C.P.A.C.A. sea remitido al superior, quien lo resolverá de plano.

4.1.2 Del título ejecutivo

El título ejecutivo, en materia contencioso administrativa se encuentra determinado en el artículo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-, el cual establece:

“ARTÍCULO 297. TÍTULO EJECUTIVO. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

*1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales **se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias**”.* (Negrilla fuera de texto original).

Se tiene entonces que uno de los documentos que constituye título ejecutivo y respecto del cual se puede pedir su ejecución en la Jurisdicción Contencioso Administrativa son las **sentencias ejecutoriadas** en las cuáles se haya condenado a una entidad pública al pago de una suma de dinero, sin hacer mención alguna a otro tipo de sentencias.

De conformidad con el artículo 422 del Código General del Proceso, el título ejecutivo es aquel que contiene una obligación **clara, expresa y exigible**, proveniente del deudor o de su causante o de una **providencia judicial**, que constituya plena prueba en contra del obligado, para efectos de ilustración se transcribe la norma referida.

“ARTÍCULO 422. TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184”.

De conformidad con lo expuesto el título ejecutivo debe reunir condiciones formales y de fondo⁶:

a) Las **condiciones formales** se concretan a que el documento o documentos donde consta la obligación provengan del deudor y constituyan plena prueba contra él; los **requisitos de fondo** se refieren a su contenido, es decir, que la obligación que se cobra sea clara, expresa y exigible.

b) Que el documento provenga del deudor o de su causante, quiere decir que éste sea su autor, el suscriptor del correspondiente documento.

En materia de sentencias judiciales, conforme lo previsto en el numeral 1º del artículo 297 del C.P.A.C.A., constituyen título ejecutivo y por regla general, *son complejos*, en tanto, para su cumplimiento requieren que la administración se pronuncie a través de un acto administrativo-ejecución-. Si la administración cumple de manera defectuosa la orden judicial el título ejecutivo estará conformado por la sentencia y el respectivo acto administrativo⁷.

Ahora cuando la providencia no fue cumplida por la administración, en estos casos constituye por sí sola título ejecutivo y en esta medida, es simple.

Así las cosas, es claro que en el presente caso se trata de un título ejecutivo contenido en la sentencia No. 001 del 22 de enero de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle Sala de Descongestión, mediante la cual se condenó a la NACIÓN – POLICÍA NACIONAL, a reintegrar al señor MARCOS YAMID MORALES MARULANDA a la entidad

⁶ Consejo de Estado, Sección Segunda, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, sentencia del 27 de mayo de 2010, radicación No. 25000-23-25-000-2007-00435-01 (2596-07).

⁷ Consejo de Estado- Sección Segunda Subsección B C.P. GERARDO ARENAS MONSALVE, proceso con radicación No. 11001-03-25-000-2014-00147-00 (0545-14) Auto del 17 de marzo de 2014.

al cargo que ostentaba al momento del retiro y al pago de los dejados de percibir.

4.3. Caso concreto.

A efectos de resolver el problema jurídico planteado, la Sala se ocupará en el estudio de los documentos allegados con la demanda ejecutiva, tales como la sentencia⁸ No. 001 del 22 de enero de 2014 y el acto expedido por la entidad ejecutada, mediante el cual se da cumplimiento al fallo.

La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho⁹

Mediante el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el demandante cuestionó la legalidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. 0278 de mayo de 10 de 2005 proferida por el Comandante de Policía del Departamento de Policía Valle, por medio del cual se retiró del servicio activo al actor.

Como restablecimiento del derecho solicitó condenar a la POLICÍA NACIONAL a reintegrar al actor sin solución de continuidad al mismo cargo o a otro equivalente o superior, y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha de retiro - 11/05/2005- hasta el reintegro, debidamente indexados los valores resultantes.

La sentencia de segunda instancia¹⁰

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Sala de Descongestión, profirió sentencia el 22 de enero de 2014, así:

“PRIMERO: REVOCAR la sentencia No. 221 del veintiocho (28) de junio de dos mil trece (2013), proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión del Circuito de Cali, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda...”.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. 0278 de mayo 10 de 2005, proferida por el Comandante Departamento Policía Valle, por medio de la cual se retiró del servicio activo a un personal del Nivel Ejecutivo adscrito al Departamento de Policía Valle, entre ellos, el demandante Subintendente Sr. Marco Yamid Morales Marulanda.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, **ORDENAR** a la NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA- POLICIA NACIONAL, a reintegrar sin solución de continuidad con las correspondientes anotaciones en la hoja de vida, al señor MARCOS YAMID MORALES MARULANDA identificado con cédula de ciudadanía No. 79.852.414 de Bogotá, al cargo que ostentaba al momento del retiro o a uno de igual o superior

⁸ Título ejecutivo que obra a folios 27-41, del expediente.

⁹ Fl.- 27, ídem.

¹⁰ Fls. 27-41, ídem.

categoría y a pagarle los sueldos y prestaciones dejadas de recibir desde la fecha siguiente al día de su retiro, es decir, a partir del 11 de mayo de 2005 hasta que se haga efectivo el reintegro aquí dispuesto.

CUARTO: ORDENAR a la NACION- MINISTERIO DE DEFENSA- POLICIA NACIONAL que se realice la indexación o actualización de los valores adeudados al demandante, atendiendo los términos del artículo 178 del C.C.A. aplicando la fórmula reseñada en la parte considerativa de este proveído.

QUINTO: DAR cumplimiento a la presente Sentencia en los términos de los artículos y 177 del C.C.A. (...)"

La sentencia cobró firmeza el 7 de febrero de 2014 (fl. 43, del expediente).

El cumplimiento de la sentencia¹¹

Obra en el expediente del proceso ejecutivo copia de la Resolución No. 04212 de 14 de octubre de 2014¹² expedida por Director General de la Policía, *“Por la cual se da cumplimiento a una sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca- Sala de Descongestión”*. Dicho acto administrativo fue notificado al demandante el 17 de octubre de 2014 (fl. 45, del expediente).

Posteriormente la Policía Nacional expidió **la Resolución No. 00183 del 28 de enero de 2015**¹³, *“Por la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 0412 del 14 de octubre de 2014”*. La notificación del acto administrativo se surtió el 30 de enero de 2015 (fl. 48, del expediente).

Finalmente se tiene que mediante la Resolución No. 480 del 16 de mayo de 2016¹⁴, se dio cumplimiento a la sentencia No. 001 del 22 de enero de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca- Sala de Descongestión.

En este documento se observa que se reconoce a la ejecutante la suma de CIENTO VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (\$123.555.490.68), que resulta de la liquidación de los salarios y prestaciones sociales dejados de devengar desde mayo de 2005 hasta mayo de 2008, y de la indexación y lo que prevé el artículo 178 del Decreto 01 de 1984. La liquidación que realizó el ente ejecutado, se discrimina así¹⁵:

CONCEPTO	VALOR
Capital	\$77.379.298.61
Intereses	\$42.859.895.36

¹¹ Fls. 44-49, del expediente.

¹² Ídem.

¹³ Fls. 46 y 47, ídem.

¹⁴ Fls. 57-63, ídem.

¹⁵ Fl. 61, del expediente.

Aporte patronal sanidad	\$3.316.296.71
Neto a pagar	\$123.555.490.68

La suma liquidada se obtuvo de los salarios, prestaciones sociales e indexación, conforme al cuadro¹⁶ de operaciones, en donde constan los valores adeudados a la demandante desde el 11 de mayo de 2005, fecha en la cual fue notificado de la Resolución No. 0278 del 10 de mayo de 2005, y el 19 de mayo de 2008, fecha de notificación de la Resolución No. 01897 del 7 de mayo de 2008¹⁷.

La Resolución No. 480 del 16 de mayo de 2016, da cuenta que al demandante se le liquidaron los salarios y prestaciones dejados de percibir desde el retiro del servicio-**11 de mayo de 2005** hasta el **19 de mayo de 2008**, esto es de forma diferente a la orden impartida en la sentencia No. 001 del 22 de enero de 2014, sin embargo considera la Sala que la POLICÍA NACIONAL dio cumplimiento a la sentencia referida, tal como pasa a explicarse:

En primer lugar es preciso señalar que si bien es cierto, en el proceso ordinario de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, con radicado 76-001-23-31-000-2005-03600-01, que culminó con la sentencia de segunda instancia No. 001 del 22 de enero de 2014, el acto administrativo contentivo de la sanción disciplinaria impuesta al señor MARCO YAMID MORALES MARULANDA por parte de la Oficina de Control Interno del Departamento de Policía Valle, **no fue objeto de debate ni decisión** por parte el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, dicha situación no es suficiente para considerar que el mismo no debe ser analizado al momento de determinar si es o no procedente librar mandamiento de pago en contra de la parte ejecutada, en tanto dicha decisión *sirvió de fundamento* para proferir el **acto administrativo de ejecución** de la sentencia del 22 de enero de 2014.

Ahora bien, cabe resaltar que por medio de la Resolución No. 0278 del 10 de mayo de 2005¹⁸, se retiró al actor del servicio activo de la Policía Nacional al demandante. **El retiro tuvo efectos a partir del 12 de mayo de 2005.**

Posteriormente mediante la Resolución No. 01897 del 7 de mayo de 2008¹⁹ "Por la cual se ejecuta una sanción disciplinaria impuesta a un Personal retirado de la Policía Nacional", se revolió:

- Registrar en la hoja de vida del demandante el correctivo disciplinario principal de destitución.
- Inhabilitar por el término de cinco (5) años en el ejercicio de funciones públicas al demandante.

¹⁶ Folio 58, 60, 64-66, del expediente.

¹⁷ Fl. 46, ídem.

¹⁸ Fl. 44, del expediente.

¹⁹ Fl. 49, ídem.

Dicha sanción fue notificada el **19 de mayo de 2008**, fecha en la que empezó a surtir plenos efectos.

Conforme lo expuesto es claro que la entidad ejecutada para efectos dar cumplimiento a la obligación de reintegro del ejecutante a un cargo igual o superior al que desempeñaba al momento del retiro, impuesta en la sentencia No. 001 del 22 de enero de 2014, modificó el acto de ejecución inicialmente proferido y señaló que dicho reintegro podía cumplirse **por el término en que la sanción disciplinaria dictada dentro de la investigación disciplinaria No. DEVAL -2005-41, no había surtido efectos**, esto es entre el **11 de mayo de 2005 al 19 de mayo de 2008**, teniendo en cuenta que a partir de la última fecha el ejecutante había sido retirado del servicio por una causa distinta a la que se debatió ante esta Jurisdicción.

Alega el apoderado judicial del actor en el recurso de apelación contra el auto que negó librar mandamiento de pago que la entidad ejecutada no podía tener en cuenta la sanción disciplinaria con fundamento en las siguientes razones:

1. De acuerdo a la sentencia aportada como título ejecutivo el actor fue retirado del servicio **en el mes de mayo de 2005**, por otro lado la sanción disciplinaria de destitución data del año 2008- por tal razón considera que la misma no aplica, teniendo en cuenta que el demandante ya estaba retirado del servicio activo de la Policía Nacional desde el año 2005.
2. La sanción disciplinaria fue un asunto que no fue sometido a debate en el proceso judicial de reintegro y pago de salarios.
3. La sanción disciplinaria no puede ejecutarse a la ejecutoria de la sentencia judicial que ordenó el reintegro del actor a la Policía Nacional, teniendo en cuenta que para ese momento la sanción se encontraba prescrita.

Los argumentos referidos no son de recibo para la Sala por las siguientes razones:

La acción disciplinaria regulada en la Ley 734 del 2002, dispone en su artículo 70, lo siguiente:

“ARTÍCULO 70. OBLIGATORIEDAD DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. <Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> El servidor público que tenga conocimiento de un hecho constitutivo de posible falta disciplinaria, si fuere competente, iniciará inmediatamente la acción correspondiente. Si no lo fuere, pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad competente, adjuntando las pruebas que tuviere.
Si los hechos materia de la investigación disciplinaria pudieren constituir delitos investigables de oficio, deberán ser puestos en conocimiento de la autoridad competente, enviándole las pruebas de la posible conducta delictiva”.

Así mismo, se tiene que la acción disciplinaria puede ejercerse aun cuando el funcionario disciplinable o **destinatario de acción** se **encuentre retirado del servicio público**, tal como lo prescribe el artículo 72 de la Ley 734 del 2002, norma que es del siguiente tenor literal:

“ARTÍCULO 72. ACCIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO RETIRADO DEL SERVICIO. <Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> La acción disciplinaria es procedente aunque el servidor público ya no esté ejerciendo funciones públicas”.

En ese orden de ideas, el hecho de que el actor haya sido retirado del servicio desde año **2005**, y posteriormente se haya ordenado su destitución en virtud a la imposición de una sanción disciplinaria en el año **2008**-, no es suficiente para considerar que la acción disciplinaria no era procedente y en ese sentido afirmar que las consecuencias de la misma no surtían ningún efecto en contra del actor.

Una vez emitida la decisión e impuesta la sanción disciplinaria, la misma debe ser notificada y ejecutada, en este caso, por el Director General de la Policía Nacional, lo anterior, con fundamento en el artículo 42²⁰ de la Ley 1015 del 2006.

En suma, atendiendo que el demandante únicamente pudo estar en el servicio activo entre el **11 de mayo de 2005 al 19 de mayo de 2008**, las ordenes de reintegro y pago de sumas de dineros dejadas de cancelar tal como lo concluyó el ejecutado y el a quo debían estar sujetas a ese periodo, toda vez que, a la fecha de la sentencia existía un acto administrativo en firme que imponía una sanción al actor, razón por la cual era imposible jurídicamente ordenar el reintegro al servicio una vez ejecutoriada la sentencia del 22 de enero de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle.

Por lo expuesto, es claro que la orden de reintegro se pudo cumplir por el lapso en que la sanción disciplinaria no había surtido sus efectos, hecho que no podía pasar por alto la Policía Nacional al momento de dar cumplimiento a la sentencia proferida en segunda instancia dictada por el Tribunal Administrativo del Valle – Sala de Descongestión, el 22 de enero de 2014.

²⁰ **ARTÍCULO 42. EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES.** La sanción se hará efectiva por:

1. El Gobierno Nacional, para Destitución y Suspensión de Oficiales.
2. El Director General de la Policía Nacional, para Destitución y Suspensión del personal del Nivel Ejecutivo, Suboficiales, y Agentes.
3. Los funcionarios con atribuciones disciplinarias para Multas y Amonestación Escrita.

PARÁGRAFO 1o. Si al momento del fallo el servidor público sancionado presta servicios en el mismo o en otro cargo similar en la misma entidad o en otra entidad oficial, incluso en período diferente, deberá comunicarse la sanción al representante legal o a quien corresponda, para que proceda a hacerla efectiva.

PARÁGRAFO 2o. Cuando el disciplinado haya cesado en sus funciones para el momento de la ejecutoria del fallo o durante la ejecución del mismo, y no fuere posible ejecutar la sanción se convertirá el término de suspensión o el que faltare, según el caso, en salarios de acuerdo al monto de lo devengado para el momento de la comisión de la falta, sin perjuicio de la inhabilidad especial.

Ahora bien, si el demandante considera que en el presente caso la sanción se encontraba prescrita, y que los actos de ejecución no están acordes con la sentencia que sirve de título ejecutivo, en tanto considera que suprimen, incluyen o modifican lo ordenado en la sentencia bien puede demandarlos a través del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, pues si bien por regla general los actos de ejecución no son demandables existe una excepción a esa regla y es su cuestionamiento en sede judicial cuando generan nuevas situaciones jurídicas²¹ tal como lo argumenta el recurrente, pues en este proceso no le es dable al juez verificar si la acción disciplinaria estaba prescrita y si era o no procedente ejecutarla por la Policía Nacional, pues el proceso ejecutivo tiene un objeto y finalidad diferentes.

Con fundamento en lo expuesto, no existe razón alguna para determinar que la Resolución No. 01897 del 7 de mayo de 2008²², carece de validez, por el contrario dicha resolución se presume legal²³ y sigue produciendo sus efectos mientras no sea declarada nula por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y por ello delimita el marco sobre el cual se debe reconocer los emolumentos salariales del señor MARCO YAMID MORALES MARULANDA entre las fechas: 1 de mayo del 2005 hasta 19 de mayo del 2008; lo cual fue correctamente pagado por la entidad demandada, mediante la Resolución 480 del 16 de mayo de 2016²⁴ y cuyo reintegro no puede hacerse efectivo, precisamente por la destitución e inhabilidad que sobrevino para el demandante.

Finalmente es importante resaltar que el Juez al momento de decidir si libra o no el mandamiento de pago está facultado para analizar detenidamente el contenido del título ejecutivo, de forma que sólo adelante la ejecución por las sumas que emanen de aquel. Es por esa razón que el artículo 430 del Código General del Proceso²⁵ prevé la posibilidad de que el operador judicial efectúe un control de legalidad desde el inicio del procedimiento, ya que la mera indicación en la demanda de una suma por la que se ejecuta a la contraparte no implica que el Juez se encuentre atado a ella, de allí que no le asiste razón al recurrente cuando argumenta que en el presente asunto los

²¹ CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION SEGUNDA - SUBSECCION "B" - Consejero ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ - Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil diecinueve (2019). - Radicación número: 76001-23-33-000-2013-00163-02(1433-17):

"Los actos de ejecución son los que la administración profiere en cumplimiento de una sentencia judicial, los cuales no son pasibles de control judicial, sin embargo, esta Corporación ha admitido una excepción según la cual los actos de ejecución pueden ser demandables, pero, si la administración al proferirlos se aparta del verdadero alcance de la decisión hasta el punto de crear situaciones jurídicas nuevas o distintas que no se hayan discutido ni definido en el fallo".

²² "Por la cual se ejecuta una sanción disciplinaria impuesta a un Personal retirado de la Policía Nacional".

²³ **ARTÍCULO 88. PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO.** Los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar.

²⁴ Ffs. 57-63, del expediente.

²⁵ Art. 430. Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquél considere legal.

efectos de la resolución que impuso una sanción disciplinaria al ejecutante es un asunto que debe someterse a debate con posterioridad a la orden de librar mandamiento de pago.

Por lo anteriormente expuesto la Sala confirmará el auto apelado, por medio de la cual no se libró mandamiento de pago en contra de la parte ejecutada al no existir obligación pendiente de cumplir.

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el auto interlocutorio No. 448 del 24 de julio de 2018 proferido por el Juzgado Dieciseis Administrativo Oral del Circuito de Cali por las razones que se exponen en esta providencia.

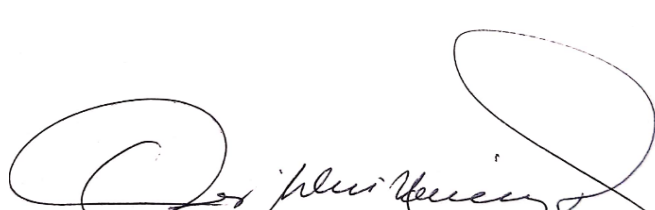
SEGUNDO: EJECUTORIADA ESTA PROVIDENCIA, REMÍTASE el expediente al Juzgado de Origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Providencia discutida y aprobada en Sala de decisión de la fecha. Acta No. 43

Los Magistrados,


EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS


OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA


OMAR EDGAR BORJA SOTO